



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

**SUMILLA:** *Los sindicatos no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada por el Decreto Legislativo N.º 1034, dado a que con su creación no se pretende competir en el mercado, siendo su fin intrínseco la defensa de los derechos laborales de sus agremiados en una relación de subordinación frente a un empleador, cuyo ejercicio es garantizado por la Constitución Política del Perú (artículo 28) y los Convenios Internacionales de la materia (Número 87 de la OIT).*

Lima, once de abril de dos mil veintitrés.

**VISTA**, la causa número dos mil treinta y cinco - dos mil veintidós - LIMA, en audiencia pública virtual de la fecha, ante este Tribunal de Casación integrado por los señores Jueces Supremos: De La Rosa Bedriñana, Ampudia Herrera, Linares San Román, Llap Unchon y Corante Morales; y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia casatoria:

**MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi** con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, obrante a fojas doscientos seis del expediente judicial digital, contra la **sentencia** de **vista** contenida en la resolución número veintitrés de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, obrante a fojas ciento sesenta y nueve del expediente judicial digital, que **revocó** la sentencia apelada contenida en la resolución número dieciocho de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, que declaró infundada la demanda; y, **reformándola** la declararon **fundada**; en consecuencia, **nula** la Resolución N.º 0479-2014/SDC-INDECOPI del dieciséis de abril de dos mil catorce.

**CAUSALES DEL RECURSO:**



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

Por resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, obrante a fojas ciento sesenta del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, por la siguiente causal: **Infracción normativa por interpretación errónea del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas**; correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento de fondo al respecto.

**CONSIDERANDO:**

**Primero. De la Pretensión demandada**

Conforme se advierte del escrito de demanda, obrante a fojas uno del expediente judicial digital, subsanada a fojas cuarenta y dos, don **Jorge Arturo Francia Alquimiche**, interpone demanda solicitando como petitorio: Se declare nula y sin efecto legal la Resolución N.º 479-2014/SDC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su sesión de fecha dieciséis de abril de dos mil catorce, que resolvió confirmar la Resolución N.º 052-2012/CLC-INDECOPI del dieciocho de diciembre de dos mil doce, en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta contra el recurrente y otros, por la comisión de prácticas colusorias horizontales en la modalidad de decisiones o recomendaciones anticompetitivas; en consecuencia, se ordene a la demandada expedir nueva resolución administrativa y se deje sin efecto legal la imposición de multas contenidas en la citada resolución.

**Segundo. Pronunciamiento de las instancias de mérito**

El Juez del Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número dieciocho de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, obrante a fojas ciento treinta y ocho del expediente judicial digital, declaró **infundada** la demanda. Señalando como fundamentos principales de su decisión que: **a)** El accionante ostentaba la



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

condición de secretario general del sindicato de estibadores, en el procedimiento administrativo tramitado por presuntas prácticas colusorias horizontales en el mercado de trabajo de estiba y desestiba en el Terminal Marítimo de Salaverry en La Libertad; en ese sentido, la conducta imputada al demandante se encontraba subsumida dentro del ámbito de aplicación subjetiva de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, pues se cumplen los supuestos de hecho requeridos por el numeral 1 del artículo 2 de la ley, en concreto: i) se encuentra frente a una entidad de derecho privado, sin fines de lucro y cuyos asociados o agremiado ofertan servicios en el mercado de trabajo de estiba y desestiba en el Terminal Marítimo de Salaverry, y ii) el señor Francia Alquimiche era un sujeto que ejercía la dirección, representación o gestión de dicha entidad, en un grado de planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa imputada; **b)** la actividad realizada por los sindicatos denunciados, entre estos, el representado por el ahora accionante en su calidad de secretario general, tenían como finalidad impedir el registro, contratación y/o capacitación de otros trabajadores portuarios, generando en consecuencia un efecto restrictivo de la libre competencia concretamente frente a trabajadores registrados ante ENAPU y/o INFOCAP dentro del mercado de trabajo de estiba y desestiba en el Terminal Marítimo de Salaverry en La Libertad; y, **c)** el señor Francia Alquimiche no ha logrado desvirtuar la responsabilidad administrativa en la conducta anticompetitiva atribuida, asimismo, no se ha formulado en la demanda argumento dirigido a cuestionar los fundamentos que sustentan la imposición de una sanción ascendente a una (1) UIT.

El Colegiado de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la referida Corte Superior, mediante sentencia de vista contenida en la resolución número veintitrés de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, obrante a fojas ciento sesenta y nueve del expediente judicial digital, **revocó** la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y reformándola la declararon **fundada**, en consecuencia, **nula** la Resolución N.º 0479-2014/SDC-INDECOPI del dieciséis de abril de dos mil catorce, luego de considerar que: **a)** Los sindicatos constituyen asociaciones



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

voluntarias para tutelar y defender los intereses de sus trabajadores en forma individual como colectiva; **b)** con respecto a la actividad económica, no comparte con lo expuesto en la resolución administrativa materia de impugnación, en razón a lo siguiente: i) La afirmación de que los sindicatos son asociaciones entre competidores no se encuentra suficientemente sustentada, por cuanto es demasiada genérica, siendo que, el hecho de que los trabajadores pretendan y coaccionen, la obtención de mejores condiciones salariales o de trabajo a su empleador no significa que sean actividades violatorias a la libre competencia, ii) la administración no motiva por qué debe priorizarse la naturaleza económica del sindicato, en lugar de su calificación legal, y iii) si bien el accionar de una organización sindical puede generar externalidades, no se debe asumir que tal accionar sea competencia de la autoridad de la libre competencia; **c)** el hecho de que los sindicatos efectúen coordinaciones entre sus integrantes, no significa que se encuentre dentro de la ley de competencia, tal conclusión colisiona con el ejercicio de la libertad sindical y la administración no aporta argumentos para ello, toda vez que, asumir eso es quitar contenido a las normas de la actividad sindical y hasta una posible intromisión en la competencia de la autoridad de trabajo y de otros estamentos; **d)** no se ha establecido motivadamente quien es el competidor o competidores del sindicato del cual el señor Francia era su secretario general, que concertaron la entrada o permanencia de un competidor; y, **e)** la situación de paralización y la obstaculización generada en Puerto Salaverry, fueron una expresión de la libertad sindical y de protección constitucional, de darse excesos en su acatamiento, ello genera dentro del ordenamiento, respuestas, tanto del empleador como de las autoridades competentes en materia laboral y no de la libre competencia.

**Tercero. Delimitación de la controversia**

Habiéndose admitido el recurso de casación solo por infracción normativa de carácter material, se procederá emitir pronunciamiento respecto de la misma, delimitándose a su vez la controversia del presente proceso: Determinar si la Sala Superior de origen ha interpretado erróneamente el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1034, Ley de Represión de Conductas



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

Anticompetitivas, en relación a que si a un sindicato de trabajadores le es aplicable la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, y por ende pasible de ser sancionado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

**Cuarto. Infracción normativa del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas**

La norma en cuestión señala lo siguiente:

**- Artículo 2.- Ámbito de aplicación subjetivo. –**

*“2.1. La presente Ley se aplica a las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades de derecho público o privado, estatales o no, con o sin fines de lucro, que en el mercado oferten o demandante bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados, agremiados o integrantes realicen dicha actividad. Se aplica también a quienes ejerzan la dirección, gestión o representación de los sujetos de derecho antes mencionados, en la medida que hayan tenido participación en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa”.*

**Quinto. Consideraciones generales**

Antes de emitir pronunciamiento de fondo sobre la causal antes citada, este Colegiado Supremo considera necesario hacer algunas precisiones sobre la libre competencia, el sindicato, la negociación colectiva y el convenio colectivo.

Libre competencia

El artículo 61 de la Constitución Política del Perú, establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combatiendo toda práctica que la limite y que haga abuso de las posiciones dominantes o monopólicas, restringiendo que ni por ley ni por concertación se pueden establecer monopolios. En ese sentido, la Carta Magna impone al Estado, la obligación de combatir las conductas anticompetitivas, en el entendido de que el proceso competitivo es la mejor forma de asegurar el mayor bienestar para los consumidores y para la sociedad en el mercado.



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

En ese orden de ideas, las conductas competitivas vendrían a ser aquellas que derriban la competencia perfecta en el mercado, las cuales, en vez de privilegiar la transparencia y el cumplimiento u observancia de las normas y buenas prácticas, prefieren las conductas engañosas y desleales.

Libertad sindical

El principio de la Libertad Sindical goza de reconocimiento universal, así el párrafo 4 del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a los mismos y en el marco de instrumentos vinculantes de la Organización de las Naciones Unidas, este derecho ha sido reconocido en el artículo 22 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 8 del Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por otro lado, la protección de la libertad sindical se encuentra garantizada por los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) números 87 y 98, buscando el primero proteger la autonomía e independencia de los sindicatos y de las organizaciones de empleadores respecto de las autoridades públicas tanto en la creación como en el fundamento y la disolución de los mismos, en tanto que el segundo tiende básicamente a proteger estas organizaciones de la injerencia recíproca, a promover la negociación colectiva y a evitar que los trabajadores sean perjudicados por realizar actividades sindicales a través de actos de discriminación antisindical.

En el Perú, la libertad sindical tiene reconocimiento a nivel constitucional en el artículo 28 de la Constitución, que establece: *“El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical (...)”*.

Negociación colectiva

MERCADER<sup>1</sup> define a la negociación colectiva como:

---

<sup>1</sup> MERCADER UGUINA, Jesús R.: Lecciones de Derecho del Trabajo, 8ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2015. P. 91.



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

*“(…), como el proceso formalizado de diálogo entre representantes de los trabajadores y empresarios encaminado, en ejercicio de su autonomía colectiva, a la consecución de un convenio colectivo regulador de las relaciones entre ambos, así como de las condiciones a que han de ajustarse los contratos de trabajo en un ámbito determinado”.*

En ese sentido, cuando se habla de negociación colectiva se hace referencia a un proceso con reglas de diálogo entre empleadores y trabajadores (carácter bilateral), cuyo resultado es un convenio colectivo que regula las relaciones entre ambos (condiciones de trabajo y empleo).

Convenio colectivo

El producto de la negociación colectiva es el convenio o pacto colectivo, el cual ha sido definido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 008-2005-PI/TC (fundamento veintinueve), de la siguiente manera:

*“c.4.4.) El convenio colectivo*

*29. Se le define como el acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales. En puridad, emana de una autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores.*

*El convenio colectivo permite la facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos de reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto. Surge de la negociación llevada a cabo entre el empleador o una organización de empleadores y una o varias organizaciones sindicales, con miras a ordenar y regular las relaciones laborales. En la doctrina aparece bajo varias denominaciones; a saber, contrato de paz social, acuerdo corporativo, pacto de trabajo, etc.*





Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

*Esta convención es establecida por los representantes de los trabajadores expresamente elegidos y autorizados para la suscripción de acuerdos y por el empleador o sus representantes.*

*La convención colectiva -y, más precisamente, su producto, el convenio colectivo, que contiene normas jurídicas- constituye un instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la armonía laboral, así como para conseguir un equilibrio entre las exigencias sociales de los trabajadores y la realidad económica de la empresa”*

Asimismo, la Recomendación N.º 91 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la convención colectiva en los términos siguientes: “(...) *la expresión de contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional”*

En ese entender, el convenio colectivo es el acuerdo formalmente arribado entre los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores, el cual va a contemplar las condiciones de trabajo y las relaciones de los trabajadores con sus empleadores, entre otros.

Sindicato de trabajadores

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N.º 008-2005-PI/TC (fundamento veintiocho), los define de la siguiente manera: “*El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que, ejerciendo el mismo oficio o profesión, o trabajando en un mismo centro de labores, se unen para alcanzar principalmente los siguientes objetivos: - Estudio, desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de sus miembros. – Mejoramiento social, económico y moral de sus miembros”.*





Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

Trabajo portuario

El artículo 2 de la Ley N.º 27866 lo define de la siguiente manera: “ (...) se entiende por trabajo portuario a la actividad económica que comprende el conjunto de labores efectuadas en los puertos privados de uso público y en los puertos públicos de la República, para realizar faenas de carga, descarga estiba, desestiba, transbordo y/o movilización de mercancías, desde o hacia naves mercantes, entre bodegas de la nave y en bahía, incluyendo el consolidado y desconsolidado de contenedores, efectuados dentro del área operativa de cada puerto. (...)”. Asimismo, en el artículo 5 de la citada Ley, se establece que: “La Autoridad Administrativa de Trabajo es competente para el conocimiento y solución de conflictos, de los procedimientos de inspección de trabajo y otros aplicables al trabajo portuario, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento y la legislación laboral del régimen de la actividad privada”.

El trabajo portuario se distingue por realizar funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de las naves como en las que se encuentren en los recintos portuarios; y, los conflictos que se puedan presentar entre los trabajadores portuarios y sus empleadores son ventilados ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, como órgano competente.

**Sexto. Solución al caso en concreto**

En sede administrativa, con fecha treinta de enero de dos mil nueve<sup>2</sup>, la empresa Trabajos Marítimos Sociedad Anónima (TRAMARSA), interpone denuncia contra el Sindicato de Estibadores y su secretario general (Jorge Francia Alquimiche), así como contra el Sindicato de Maniobristas y su secretario general (Humberto Caballero Espinoza), a fin de que se les declare que han incurrido en una infracción a las normas de libre competencia en la modalidad de prácticas colusorias horizontales en el Terminal Marítimo del

---

<sup>2</sup> Escrito obrante a fojas dos del expediente administrativo digital.



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

Puerto de Salaverry, al realizar actos de boicot y obstaculización que limitan la competencia en el mercado de servicios de estiba y desestiba en el referido terminal. Por Resolución N.º 011-2007/ST-CLC-INDECOPI de fecha **veintiséis de mayo de dos mil nueve**, el Tribunal de Indecopi, resolvió iniciar de oficio un procedimiento administrativo sancionador, entre otros, contra el señor Jorge Arturo Francia Alquimiche.

Mediante Resolución N.º 052-2012/CLC-INDECOPI de fecha **dieciocho de diciembre de dos mil doce**<sup>3</sup>, se resolvió -entre otros- declarar fundado el extremo del inicio del procedimiento iniciado contra -entre otros- Jorge Arturo Francia Alquimiche, por presunta comisión de prácticas colusorias horizontales en la modalidad de decisiones o recomendaciones anticompetitivas para la obstaculización de la entrada de competidores en el mercado de trabajo portuario en el Terminal Marítimo de Salaverry, y sanciona con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria; la misma que al ser impugnada fue confirmada por Resolución N.º 0479-2014/SDC-INDECOPI de fecha **dieciséis de abril de dos mil catorce**<sup>4</sup>.

**Sétimo.** Ahora bien, la presunta comisión de prácticas colusorias horizontales en la modalidad de decisiones o recomendaciones anticompetitivas para la obstaculización de la entrada de competidores en el mercado de trabajo portuario en el referido Terminal, se sostiene en el impedimento de la capacitación, el registro y la contratación de otros trabajadores portuarios distintos a los sindicalizados, habiendo utilizado como medio para dicho fin, acciones de paralización y protesta el diecinueve de setiembre de dos mil ocho, previa coordinación mediante volantes dirigidos a la opinión pública.

**Octavo.** El principal argumento de la entidad recurrente para señalar que a los sindicatos le son aplicables las normas de la libre competencia, es que el artículo materia de denuncia debe ser interpretado de manera concordante con

---

<sup>3</sup> Obrante a fojas dos mil cuatrocientos sesenta del expediente administrativo digital.

<sup>4</sup> Obrante a fojas dos mil doscientos setenta del expediente administrativo digital.



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

la exposición de motivos de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada por el Decreto Legislativo N.º 1034, que señala lo siguiente (se cita lo pertinente):

***Ámbito de aplicación subjetivo***

*En el Decreto Legislativo se ha delimitado con mayor precisión el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley a través del numeral 2.1 de su artículo 2. Si bien al igual que el DL 701 y la mayoría de legislaciones a nivel comparado, el criterio de la realización de actividad económica sigue determinando a quiénes se aplica la normativa de defensa de la competencia, se ha enfatizado el hecho de que ello es independiente del tipo de persona (natural, jurídica, patrimonio autónomo u otras entidades), finalidad (lucrativa o no) o naturaleza jurídica (pública o privada). Es así que se establece que a todo aquel que oferte o demande bienes o servicios en el mercado, le resultará aplicable la Ley.*

*(...)*

*Asimismo, habiéndose verificado en la experiencia práctica que, si bien las conductas anticompetitivas son llevadas a cabo en la mayoría de los casos por los propios agentes económicos que, en situaciones regulares, competirían en el mercado; en algunos casos estos agentes buscan evadir su responsabilidad por infracción a las normas de defensa de la competencia a través de la utilización de las asociaciones o gremios empresariales. Ello sucede cuando estas asociaciones son las que originan la práctica anticompetitiva, lo que puede ocurrir a través de una recomendación de carácter meramente orientados o una decisión obligatoria para sus asociados que tengan por efecto que éstos realicen una práctica anticompetitiva como, por ejemplo, que dejen de competir en un mercado, o que fije precios o tarifas comunes a los consumidores. En tal escenario, el Decreto Legislativo especifica que se podrá imputar responsabilidad a la asociación de empresa por la adopción de una decisión o recomendación anticompetitiva, sin perjuicio de la responsabilidad de sus asociados por la puesta en práctica de la conducta anticompetitiva". (resaltado agregado)*

**Noveno.** Al respecto, es necesario precisar que tal y como lo ha señalado la Sala Superior no existe contradicción alguna en afirmar que el sindicato es una entidad de derecho privado y sin fines de lucro, cuyos integrantes (trabajadores) realizan una actividad económica; sin embargo, la entidad recurrente, intenta situar al sindicato, como un agente económico que busca evadir su responsabilidad a las normas de la libre competencia bajo el ropaje de una asociación. Argumento totalmente inconsistente, pues obvia considerar el contexto jurídico de esta organización y la finalidad reconocida



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

internacionalmente de su creación, atribuyéndole una actividad económica que es distinta a la que le corresponde.

La actividad económica que realizan los trabajadores en el seno del sindicato, difiere completamente de la realizada por una empresa o una asociación sujeta a las normas de la libre competencia, toda vez que, con dicha actividad se busca principalmente el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros, en función de su interés común que es la mejora de la relación con su empleador y las condiciones de trabajo. De allí, que en ningún momento pretenda competir con otra asociación o institución, en las que las variables de la oferta y la demanda importan significativamente, a efectos de mantener vigente su existencia; razón por la cual no le resulta aplicable la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobada por el Decreto Legislativo N.º 1034.

**Décimo.** A lo expuesto, debe agregarse que uno de los elementos principales en la relación laboral, es, la subordinación<sup>5</sup>, precisión que resulta relevante, dado a que si bien la entidad recurrente alega que cuando una persona busca trabajo se convierte en un ofertante de sus servicios y que compite con otros, lo que se extendería a los integrantes de un sindicato y este último propiamente dicho (ofertantes), se debe resaltar que cuando esa persona ingresa a laborar a un centro de trabajo, se somete a las directrices del empleador y deja de competir entre sus pares; siendo que, ante la eventualidad de que se sindicalice y en defensa de sus derechos laborales, solicite mejoras en sus condiciones de trabajo y realice acciones conducentes salvaguardar el vínculo laboral de sus agremiados, no puede interpretarse como acciones que atentan la libre competencia, y por ende ser competencia del Indecopi.

---

<sup>5</sup> **Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N.º 003-97-TR**

**Artículo 9.** Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

**Décimo primero.** En ese orden de ideas, si bien en el ejercicio de la libertad sindical inherente al sindicato, se pueden generar externalidades, la autoridad competente para resolver dichas controversias lo constituye la Autoridad Administrativa de Trabajo; siendo que, en el caso concreto, ante las paralizaciones realizadas por el sindicato de estibadores con la finalidad de que no se contrate personal no sindicalizado, representado por el señor Jorge Arturo Francia Alquimiche (secretario general) y el sindicato de Maniobristas, representado por el señor Humberto Caballero Espinoza (secretario general), la autoridad competente para resolver o legitimar dichas acciones era la Autoridad Portuaria y Dirección Regional de La Libertad<sup>6</sup>, entidades administrativas a las cuales incluso la empresa TRAMARSA Sociedad Anónima acudió antes de interponer su denuncia ante Indecopi, conforme se advierte de las solicitudes presentadas con fechas nueve y diez de julio de dos mil ocho, obrantes a fojas ciento veintiséis y ciento veintiocho del expediente administrativo digital, respectivamente, así como la presentada con fecha seis de agosto de dos mil ocho, obrante a fojas ciento cuarenta y ocho. De otro lado, en el supuesto de que se configuren delitos en el accionar del sindicato, lo llamados a investigar y sancionar dichas conductas son la autoridad policial, fiscal y órgano jurisdiccional competente, mas no el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi.

**Décimo segundo.** Finalmente, al determinar Indecopi que a los sindicatos les son aplicables las normas de la libre competencia, resulta totalmente impreciso, pues una vez más omite considerar los diferentes tipos de sindicatos que existen a nivel nacional y que han sido delimitados por el artículo 5 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (empresa, actividad, gremio y oficios varios); verbigracia, el alcance de la negociación colectiva y accionar de un sindicato de empresa difiere en gran medida de uno constituido por actividad.

**Décimo tercero.** Por otro lado, la entidad recurrente alega que se debe considerar lo resuelto en la Resolución N.º 229-97/TDC-INDECOPI, en la cual

---

<sup>6</sup> En concordancia con el artículo 5 de la Ley de Trabajo Portuario – Ley N.º 27866



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

se analizó la responsabilidad del Colegio Químico Farmacéutico del Perú por la presunta comisión de conductas anticompetitivas; sin embargo, un Colegio Profesional no tiene la misma naturaleza y calificación legal que un sindicato de trabajadores; razón por la cual debe desestimarse lo pretendido en este extremo.

**Décimo cuarto.** En consecuencia, la Sala Superior no ha incurrido en la infracción denunciada, en tanto que la correcta interpretación del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, es que los sindicatos no se encuentran dentro del ámbito subjetivo de aplicación de dicha Ley, dado a que con su creación no se pretende competir en el mercado, siendo su fin intrínseco la defensa de los derechos laborales de sus agremiados en una relación de subordinación frente a un empleador, todo ello garantizado por la propia Constitución (artículo 28) y los Convenios Internacionales de la materia (Número 87 de la OIT). En consecuencia, el recurso planteado deviene en **infundado**.

Por estas consideraciones

**DECISIÓN:**

Declararon: **INFUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi** con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, obrante a fojas doscientos seis del expediente judicial digital; en consecuencia, **NO CASARON** la **sentencia** de **vista** contenida en la resolución número veintitrés de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, obrante a fojas ciento sesenta y nueve del expediente judicial digital; en los seguidos por Jorge Arturo Francia Alquimiche contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, sobre acción contencioso administrativa; y, **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El



Corte Suprema de Justicia de la República  
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

**SENTENCIA**  
**CASACIÓN N° 2035-2022**  
**LIMA**

Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. **Interviene como ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana.**

**S.S.**  
**DE LA ROSA BEDRIÑANA**  
**AMPUDIA HERRERA**  
**LINARES SAN ROMÁN**  
**LLAP UNCHON**  
**CORANTE MORALES**

*Jchz/spa*